

CONTENIDO

	Pág N°
PODER EJECUTIVO	
Decretos.....	2
DOCUMENTOS VARIOS.....	4
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	
Edictos	38
Avisos.....	39
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.....	41
REGLAMENTOS	45
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.....	52
RÉGIMEN MUNICIPAL	53
AVISOS.....	53
NOTIFICACIONES.....	75
FE DE ERRATAS.....	75

El Alcance Digital N° 68 a La Gaceta N° 72 circuló el martes 16 de abril de 2013 y contiene acuerdos y resoluciones del Poder Legislativo, Documentos Varios, Instituciones Descentralizadas y Notificaciones.

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

N° 37628-MINAE

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

En ejercicio de las atribuciones que les confieren los artículos 11, 50, 140 incisos 8), 18), y 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 4, 11, 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápites b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; los artículos 16 y 17 de la Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 2 de mayo de 1974, el artículo 2, incisos a), c), ch), y e) de la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía, Ley N° 7152 del 5 de junio de 1990 y sus reformas; artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N° 7593 del 09 de agosto de 1996 y sus reformas; Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220, del 4 de marzo del 2002 y sus reformas, Ley General de Control Interno, Ley N° 8292, del 31 de julio del 2002, Decreto Ejecutivo N° 30131-MINAE-S del 20 de diciembre del 2001; Decreto Ejecutivo N° 36627-MINAE del 23 de mayo del 2011.

Considerando:

I.—Que según lo dispuesto en la Constitución Política en el artículo 140 incisos 8) y 18) se establece que son atribuciones del Presidente en conjunto con el Ministro del Ramo “vigilar el buen funcionamiento de los

servicios y dependencias administrativas” y “darse el Reglamento que convenga para el régimen interior de sus -despachos y ordenanzas necesarios para la pronta de ejecución de las leyes”.

II.—Que en el artículo 26 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 se estipula que el Presidente de la República tiene como potestad “dirigir y coordinar las tareas de Gobierno y de la Administración Pública central en su total conjunto (...)”.

III.—Que en el numeral 27 de la Ley General de la Administración Pública se contempla que son funciones del Poder Ejecutivo “dirigir y coordinar la Administración, tanto central como, en su caso, descentralizada del respectivo ramo”, y en el artículo 28 inciso a) de la citada Ley, se regula que el Ministro como órgano jerárquico superior del respectivo Ministerio, tiene como atribución “dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio”.

IV.—Que los artículos 56, 57 y 58 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 establecen que los recursos energéticos constituyen factores esenciales para el desarrollo sostenible del país, sobre los que el Estado mantendrá un papel preponderante pudiendo dictar medidas generales y particulares.

V.—Que el artículo 5 inciso d) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N° 7593, establece que el suministro de combustibles derivados de los hidrocarburos es un servicio público, dentro de los que se incluyen: 1) los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados a abastecer la demanda nacional en planteles de distribución y 2) los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados al consumidor final.

VI.—Que el citado artículo 5° de la Ley N° 7593 y el Decreto N° 30131-MINAE-S confieren al Ministerio de Ambiente y Energía la potestad de otorgar la autorización para prestar el servicio público de suministro de combustibles derivados de los hidrocarburos, destinados al consumidor final, competencia que ejerce a través de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible, quien recibirá y tramitará las solicitudes para el otorgamiento de autorizaciones para el transporte, almacenamiento y distribución de combustible, así como emitir la recomendación al Ministro de Ambiente y Energía para conceder los respectivos permisos.

VII.—Que de conformidad con el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, eficiencia, adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad de trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.

VIII.—Que siendo el suministro de derivados de petróleo un Servicio Público, tal y como lo indica la legislación respectiva, es deber del Estado garantizar su continuidad, y la prestación efectiva de éste, de manera tal que se asegure el abastecimiento continuo y suficiente de dichos combustibles, los cuales son necesarios para el desarrollo económico y productivo nacional, revistiendo una importancia vital para la economía y seguridad ciudadana y protección ambiental.

IX.—Que en el Decreto Ejecutivo N° 30131-MINAE-S en su numeral 5 se indica que la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible es la encargada de regular, fiscalizar, controlar y verificar todo lo relativo al transporte y comercialización de combustibles, así como los aspectos relacionados con el buen funcionamiento de las instalaciones de autoconsumo y las de almacenamiento y distribución de productos derivados de hidrocarburos.

Junta Administrativa

Jorge Luis Vargas Espinoza
DIRECTOR GENERAL IMPRENTA NACIONAL
DIRECTOR EJECUTIVO JUNTA ADMINISTRATIVA

Licda. Marcela Chacón Castro
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

María Isabel Brenes Alvarado
REPRESENTANTE EDITORIAL COSTA RICA

Lic. Isaías Castro Vargas
REPRESENTANTE MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Imprenta Nacional
Costa Rica

TELÉFONO 2296-9570

FAX: 2220-0385

APARTADO POSTAL: 5024-1000

www.imprentanacional.go.cr

X.—Que de conformidad con la Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 es obligación del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.

XI.—Que la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 y sus reformas, ordena simplificar los trámites y requisitos establecidos por la Administración Pública frente a los ciudadanos, evitando duplicidades y garantizando en forma expedita el derecho de petición y el libre acceso a los departamentos públicos, contribuyendo de forma innegable en el proceso de reforzamiento del principio de seguridad jurídica del sistema democrático costarricense.

XII.—Que diversas entidades y organizaciones públicas y privadas, han presentado ante el Ministerio de Ambiente y Energía denuncias y quejas constantes sobre la débil organización interna, deficiencia en la prestación de servicios, inconsistencias técnicas y dilación excesiva de los plazos legales para resolver las gestiones en la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible, existiendo un atraso administrativo de aproximadamente de hasta 4 años, lo que ha provocado una grave disminución en la calidad de los servicios, afectación de la credibilidad, así como la falta de supervisión y control de los tanques de almacenamiento, tanques cisternas, estaciones de servicios, y otros, en perjuicio de la ciudadanía y la seguridad en el servicio público.

XIII.—Que en atención a las anteriores obligaciones dispuestas por la Ley N° 8220, y de la demás normativa vigente, el Ministerio de Ambiente y Energía considera necesario establecer los pasos y plazos que serán públicos para el mayor número de trámites posibles, que se iniciará por las solicitudes, renovaciones y trámites de las 360 estaciones de servicio de combustible, los permisos para el transporte de hidrocarburos mediante cisternas, y la vigilancia de envasadoras y la cadena de valor del mercado de gas licuado de petróleo (LPG).

XIV.—Que no obstante, se han realizado exhortaciones a la Dirección de Transporte y Comercialización de Combustibles, para que se corrijan las deficiencias administrativas, no se ha logrado la mejora del servicio, lo que obliga a que se utilicen otros instrumentos que permitan dar una solución a esta problemática, bajo un abordamiento directo y efectivo.

XV.—Que en cumplimiento de las obligaciones legales, del Poder Ejecutivo, y ante el hecho de que la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible enfrenta una grave crisis organizativa, operativa-administrativa y de gestión es por ello que el Estado requiere de una inmediata intervención que permita una efectiva y oportuna reestructuración y reorientación de la citada Dirección para que cumpla estrictamente con su objetivo fundamental de creación.

XVI.—Que por el grado de complejidad de la materia y en virtud de las obligaciones legales del Poder Ejecutivo, y por razones de interés público, resulta conveniente constituir una Comisión que proceda a intervenir administrativamente a la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible, a fin de que ésta cuente a la brevedad con una adecuada estructura, un alto nivel técnico-profesional, se garantice el uso racional de los recursos y una ejecución operativa eficiente y acorde a sus atribuciones. **Por tanto,**

DECRETAN:

INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE

Artículo 1°—**De la Intervención Administrativa de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible (DGTCC).** Intervéngase a la DGTCC, por razones de interés público, a fin de que en definitiva opere, mantenga, amplíe y modernice los servicios públicos de fiscalización, control y vigilancia del transporte y comercialización de combustible y cuente a la brevedad con una adecuada estructura administrativa, un alto nivel técnico-profesional, integrador de los esfuerzos estatales para garantizar su eficiencia máxima, con apego a la legalidad y a las

políticas sectoriales, el uso racional de los recursos y una ejecución presupuestaria eficiente y acorde a sus atribuciones legales.

Artículo 2°—**De la Comisión Interventora.** A efectos de ejecutar la intervención administrativa de la DGTCC, se constituye una Comisión Interventora Administrativa, cuyos miembros serán designados por el Ministro de Ambiente y Energía, pudiendo integrarse funcionarios de otras instituciones públicas con conocimiento en la materia; para lo cual hará la solicitud al Jerarca que corresponda con el fin de hacer la designación.

Artículo 3°—**De las facultades de la Comisión Interventora Administrativa.** La Comisión Interventora Administrativa contará con todas las facultades que correspondan al Director General de la DGTCC, específicamente en lo que respecta a su funcionamiento, desarrollo y operación, ejerciendo por lo tanto, todas las atribuciones financieras, de administración y dirección de las actividades conferidas por el ordenamiento jurídico a la citada DGTCC.

La Comisión Interventora Administradora, una vez integrada, podrá recomendar al Ministro remover, trasladar, o reubicar, a los funcionarios de la DGTCC que considere pertinentes.

Artículo 4°—La Comisión Interventora deberá rendir, ante el Ministro de Ambiente y Energía, un Informe de Evaluación y Mejora de la DGTCC, que deberá incluir las medidas transitorias implementadas y las recomendaciones para su modernización y mejora, dentro de los noventa (90) días calendarios siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto Ejecutivo.

El citado Plan deberá incluir como mínimo las recomendaciones necesarias para establecer los pasos y plazos del mayor número de trámites posibles de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible, los cuales deberán ser públicos, objetivos y transparentes, priorizando su labor en las solicitudes, renovaciones y trámites de las estaciones de servicio de combustible, las solicitudes de permiso de las unidades de transporte de combustible (cisternas) y la vigilancia de envasadoras y la cadena de valor del mercado de gas licuado de petróleo (LPG).

Artículo 5°—**Del plazo.** La Comisión Interventora Administrativa permanecerá en sus funciones por un período de hasta cuatro meses.

Este término podrá ampliarse por el Ministro de Ambiente y Energía, hasta que se concluyan las gestiones para mejorar la situación administrativa, operativa y tecnológica, según el Informe de Evaluación y Mejora emitido por la Comisión Interventora.

Artículo 6°—**Declaratoria de interés público.** Se declara de interés público y nacional, el proceso de intervención de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles.

Artículo 7°—**Suspensión de trámites.** Dada la naturaleza de las atribuciones delegadas por este Decreto Ejecutivo a la Comisión Interventora Administrativa, se suspende por un plazo de noventa días naturales a partir de la promulgación de este Decreto el conocimiento de todo trámite de la DGTCC, exceptuándose las siguientes solicitudes:

- El trámite de atención de denuncias.
- Requerimientos Judiciales, de la Procuraduría General de la República, de la Defensoría de los Habitantes y de la Contraloría General de la República.
- Trámites de Instituciones Públicas.
- Solicitudes relacionadas con los proyectos y/o las actividades de interés nacional.
- Los trámites relacionados con tanques de autoconsumo.
- Otras solicitudes con carácter de urgencia.

Durante el periodo de suspensión únicamente se atenderá la recepción de solicitudes, cuya resolución final quedará pendiente de conocerse durante el plazo indicado en el presente artículo.

Artículo 8°—**Vigencia.** El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial *La Gaceta*.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece.

LAURACHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Ambiente y Energía, Dr. René Castro Salazar.—1 vez.—O. C. N° 18001.—Solicitud N° 60605.—C-120800.—(D37628-IN2013022524).